

/

1

9


di

M

S

h

7.



establecerse con referencia al objeto de protección y ordenación intentado en cada supuesto, con íntima vinculación al derecho fundamental que resulte o pudiere resultar lesionado.

Dentro de la misma sentencia, la Sala en mención señaló como elementos del principio de proporcionalidad los siguientes: (i) la idoneidad de los medios empleados; esto es, que la duración e intensidad de los mismos deben ser los exigidos por la finalidad que se pretende alcanzar; y, (ii) la necesidad de tales medios; es decir, que se debe elegir la medida menos lesiva para los derechos fundamentales, la que permita alcanzar la finalidad perseguida con el menor sacrificio de derechos e intereses del afectado.

En definitiva, se destaca que uno de los elementos del principio en referencia, *es la ponderación de intereses, a fin de determinar la existencia de una relación razonable o proporcionada de la medida con la importancia del bien jurídico que se persigue proteger.*

En ese sentido, este principio va dirigido a realizar un juicio relacional entre el bien jurídico tutelado y el daño que podría causar el acto o la resolución que se dicte. Se propugna así que la afectación del interés particular guarda relación razonable con el daño o la importancia del interés colectivo que se trata de salvaguardar, por lo que, en supuestos como el que se analiza, ante una afectación mínima del interés general, la Administración deberá abstenerse de crear un daño mayor al administrado a través de la sanción.

B. En casos como los planteados, en el que se denuncian los hallazgos de productos sin precio a la vista, incumpliendo las obligaciones estipuladas en el artículo 27 letra c) de la LPC; resulta importante mencionar que al efectuar un análisis del caso en particular, se observa que el despliegue de la actividad administrativa para el inicio y tramitación de la denuncia presentada por la infracción al artículo 42 letra f) de la LPC, en relación al daño causado, resultaría desproporcional, ya que se trata únicamente de cuatro tipos de productos. Respecto al segundo caso planteado, es decir, los productos encontrados con posterioridad a su fecha de vencimiento, al igual que el caso anterior, se observa que el despliegue de la actividad administrativa para el inicio y tramitación de la denuncia presentada por la infracción al artículo 44 letra a) de la LPC, en relación al daño causado, resultaría desproporcional, ya que se trata de únicamente cuatro productos vencidos.

C. Y es que, si bien consta en el folio 5 y folio 6 que en el establecimiento en cuestión se encontraron productos con posterioridad a su fecha de vencimiento y productos sin precio a la vista, se advierte que el referido incumplimiento al artículo 27 letra c), se podría subsanar marcando el precio en los empaques o envases de los productos, en carteles visibles o en

cualquier otro medio idóneo –artículo 27 inciso 2º de la LPC-; es decir, aún colocando un precio por cada tipo de producto y no necesariamente en cada producto, lo que en este caso significaría cuatro precios con indicación del tipo al que corresponden. Por lo que, los hallazgos anteriormente mencionados plantean una situación de *mínima incidencia*, careciendo de evidente trascendencia, intensidad y magnitud para afectar sustancialmente el bien jurídico protegido.

Por las razones expuestas, este Tribunal estima que en este caso no procede iniciar una acción administrativa sancionatoria contra el proveedor [redacted] por el incumplimiento observado.

Lo sostenido no significa que el Tribunal avale los incumplimientos a la ley, sino que solo ante situaciones de mínima incidencia y valor pecuniario, se debe evitar poner en marcha el aparato estatal en materia administrativa sancionatoria, razón por la cual, la reiteración de otras denuncias en este mismo sentido, ameritará el inicio del procedimiento sancionatorio, no importando la cantidad de productos que se encuentren en tal condición.

II. En razón de lo anteriormente expuesto y sobre la base de lo dispuesto en el artículo 144-A de la Ley de Protección al Consumidor, este Tribunal **RESUELVE**:

a) *Declarar improcedente* la denuncia presentada por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, en contra del proveedor [redacted] por el supuesto incumplimiento a lo prescrito en los artículos 14 y 27 letra c) de la LPC.

b) *Notifíquese*.


PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LA SUSCRIBEN.


MQ

